TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA

Sala Civil Familia

Bogotá D.C., tres de febrero de dos mil veintitrés

Referencia 25269-31-84-002-2013-00088-01

Se decide el recurso de apelación formulado contra el auto de 3 de noviembre de 2022 que dictó el Juzgado 2º Promiscuo de Familia de Facatativá, dentro del proceso de sucesión del causante Franklyn Jovanny Ardila Campos.

ANTECEDENTES

1. De acuerdo con las actuaciones, la cónyuge sobreviviente y la causahabiente KJAM -menor de edad-, presentaron una solicitud de nulidad fincada en el precepto 121 del Código General del Proceso, cuyo sustrato fáctico apunta a que se invaliden las actuaciones con fundamento en que la controversia no cuenta con sentencia muy a pesar de que fue radicada en el año 2013, omisión que, en sus criterios, desquició la anualidad contemplada en aquella norma.

2. El juzgado, a través del auto apelado, declaró infundada la incidencia porque conceptuó que la anulabilidad blandida se encuentra subsanada por motivo de que no se alegó,

dentro del año consagrado en el citado artículo 121, herramienta jurídica que, sostuvo, no puede invocarse en procesos sucesorios.

3. Las incidentantes, recurrieron en apelación la decisión en función de que salga airosa su reclamación, remedio jurídico que estibarón indicando que el juicio mortuario tiene 8 años de haberse admitido, empero, no cuenta con veredicto que adjudique el patrimonio hereditario puesto a consideración, escenario que, en sus opiniones, abre paso a dispensar con favor las consecuencias jurídicas reglamentadas en el canon 121 del Código General del Proceso y, entre diversos pronunciamientos, advirtieron que no es verídico que el ordenamiento imperante excluyó al litigio de sucesión de los efectos de aquella norma, habida cuenta de que legislador no erigió esa diferenciación.

4. El juzgador, concedió la alzada en el efecto devolutivo.

CONSIDERACIONES

Hay que dejar en claro que el artículo 121 del Código General del proceso cobró vigencia en el año 2016, lo que significa que la anualidad decisoria erigida en esa norma empieza a regir a partir de esa fecha, eso sí, para contiendas como la sometida a escrutinio; por manera que no es posible contar ese año con efectos retroactivos, dicho ello apropósito de indicar que los doce meses

gobernados en ese precepto no pueden aplicarse a partir del 2013, cuando fue radicada esta controversia mortuoria.

Sobre el particular la Corte Constitucional en la Sentencia T-341 de 2018 informó que *"en [los] procesos iniciados en vigencia del Código de Procedimiento Civil y adecuados con posterioridad a las disposiciones del Código General del Proceso, no resulta viable computar el término de un año con el que el juez cuenta para proferir la sentencia de primera instancia, a partir de la fecha en que se efectuó la última notificación de la demanda a la contraparte ... por tanto, lo razonable en estos casos, es contabilizar el término desde el momento en que le eran aplicables al trámite las nuevas normas de procedimiento"*, (énfasis fuera del texto).

Viene oportuno destacar que los postreros pronunciamientos jurisprudenciales vienen apuntando a que la nulidad del precepto 121 del Código General del Proceso puede sanearse, de donde se sigue que el marco temporal instrumentado para desatar la contienda no conduce a la pérdida de la competencia ni a la invalidez automática de la actividad judicial, si se tiene que en los eventos en que haya consentimiento expreso o tácito, no se generarán tales consecuencias.

Lo anterior por cuanto *"la Corte Constitucional declaró inexecutable la expresión de 'pleno derecho' contenida en el inciso*

sexto del artículo 121 del CGP... significa que la nulidad no opera de pleno derecho, por tanto, debe ser alegada por las partes antes de proferirse la correspondiente sentencia, y esta puede sanearse de conformidad con la normatividad procesal civil (art. 132 y subsiguientes del Código General del Proceso”, (AC5149, 4 dic. 2019, rad. n.º 2011-00299-01).

Además, el incumplimiento del término decisorio del artículo 121 de la Ley 1564 de 2012, automáticamente no estructura la anulabilidad reglamentada en ese canon, habida cuenta de que *“...un incumplimiento meramente objetivo del mismo no puede implicar, a priori, la pérdida de la competencia del respectivo funcionario judicial y, por lo tanto la configuración de la causal de nulidad de pleno derecho de las providencias dictadas por fuera del término fijado en dicha norma, no opera de manera automática”.*

Con abrigo en lo expuesto, emerge evidente que la invalidez y pérdida de competencia, conjuradas quedaron como producto de que las inconformes luego de finalizada la anualidad reseñada concurrieron al litigio sin proponer esa herramienta jurídica; son así las cosas porque, dentro de la audiencia de inventarios y avalúos seguida el 4 de noviembre de 2021, participaron en la pugna sin haber empuñado de entrada la nulidad que concita la atención de este tribunal -con la activación cabal de los

recursos necesarios para insistir en su anhelo-, de manera que ese actuar convalidó la anulabilidad orientada contra lo actuado.

Respecto de lo cual, la Sala de Casación Civil en la sentencia SC3377-2021 comentó que *“dicho de otra manera, queda fuera de dubitación que, con ocasión de la exclusión del ordenamiento jurídico de las expresiones «de pleno derecho» y «automática», contenidas en el original canon 121 del CGP, para que se produzcan los efectos invalidantes después de agotado el tiempo para sentenciar, es indispensable que alguno de los sujetos procesales invoque este hecho antes de que actúe o de que se profiera el veredicto final, pues en caso contrario se sanea el vicio y se dará prevalencia al principio de conservación de los actos procesales”.... En efecto, dispone el artículo 136 que «[l]a nulidad se considerará saneada... [c]uando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente» (numeral 1), huelga explicarlo, cuando el interesado, a pesar de configurar el desatino procesal, es abúlico en su proposición, pues con este comportamiento da a entender que renuncia a la misma y que no la enarbolará en lo sucesivo”.*

En suma, tampoco puede abrirse paso a la nulidad en la medida en que, según puede verificarse en el dossier, la autoridad de primera fase no ha sido desidiosa frente al manejo del caso, habida cuenta de que ha venido dispensando las solicitudes de los contendientes, a más de que se ha preocupado por definir la primera

instancia, si se tiene que en pretérita oportunidad siguió la audiencia de inventarios y avalúos.

De donde se sigue que la temática se encuentra en fase avanzada, lo que denota que esas circunstancias impiden dispensar con éxito el pedido de nulidad, pues de lo contrario, se lesionaría el efectivo acceso a la administración de justicia de los intervinientes y se les cerraría la posibilidad de obtener una tutela jurisdiccional efectiva, si en la cuenta se tiene que la anulabilidad pretendida opacaría las actuaciones desplegadas.

Tal horizonte impone premiar dichas prerrogativas constitucionales por encima de la sanción del artículo 121 de la Ley 1564 de 2012, laborío que de algún modo manda hacer el artículo 11 de ese estatuto, no en vano instituye que *“al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias”*, (énfasis fuera del texto).

Por lo tanto, se confirmará la providencia.

DECISIÓN¹

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, **confirmar** el auto recurrido, sin condena en costas. Una vez cobre ejecutoria, retorne el expediente a la oficina de origen.

Notifíquese y cúmplase,

Firmado electrónicamente

JAIME LONDOÑO SALAZAR

Magistrado

¹ Para la resolución de la presente actuación se conformó el respectivo expediente de manera virtual, ello, siguiendo el protocolo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura. Dicha actuación podrá ser consultada a través del link: https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jlondons_cendoj_ramajudicial_gov_co/EiR-CaGCyRMrGcD9oYMR-UBfjd5lfEteVsCQUOS_7Aqnw?e=hemJWV

Firmado Por:
Jaime Londono Salazar
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 003 Civil Familia
Tribunal Superior De Cundinamarca - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c0180890b5e0b68d872ab5d4934c438e752b8ec57b8e130b295d831f8fdbd7c9**

Documento generado en 03/02/2023 09:02:22 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>